

Chillán, doce de abril de dos mil veinticuatro.

Visto:

En estos autos **RUC 2200445825-0, RIT 286-2023** del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Chillán, por sentencia de catorce de febrero del año en curso, la Primera Sala integrada por los jueces titulares Claudia Montero Céspedes y Raúl Romero Sáez como presidente, y por la jueza suplente Lorena Rojo Venegas, como redactora, decidió condenar, por mayoría, al acusado **PATRICIO SEBASTIÁN SOTO BRAVO** como: I) autor del delito consumado de **HOMICIDIO SIMPLE** en perjuicio de la adolescente **M.J.R.T.**, previsto y sancionado en el artículo 391 N° 2 del Código Penal, respecto del hecho cometido el día 9 de mayo de 2022, en la comuna de Chillán, a la pena de (15) quince años de presidio mayor en su grado medio, a la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena; II) como autor del delito **FRUSTRADO de HOMICIDIO SIMPLE** en perjuicio de **Luis Jefferson Franco Tello**, previsto y sancionado en el artículo 391 N° 2 del Código Penal, respecto del hecho cometido el día 9 de mayo de 2022, en la comuna de Chillán, a la pena de (7) siete años y (184) ciento ochenta cuatro días de presidio mayor en su grado mínimo, a la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena; y III) como autor del delito consumado de **PORTE ILEGAL DE ARMA DE FUEGO**, previsto y sancionado en el artículo 2 letra b) en relación al artículo 9 de la ley 17.798, respecto del hecho cometido el día 9 de mayo de 2022, en la comuna de Chillán, a la pena de (3) tres años y (1) un día de presidio menor en su grado máximo, inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena.

Se declaró en dicha sentencia que no se concede al sentenciado ninguna de las penas sustitutivas contempladas en la Ley 18.216, motivo por

el cual deberá cumplir de manera efectiva las respectivas condenas impuestas, existiendo abono que considerar en razón del tiempo que ha estado de privado de libertad ininterrumpidamente en esta causa, desde el día 21 mayo de 2022 a la fecha de hoy, según consta el Auto de Apertura y en SIAGJ.

La sentencia contó con el voto en contra de la jueza suplente Lorena Rojo Venegas, quien estuvo por absolver al acusado de todos los cargos formulados por los acusadores, en virtud de los fundamentos que indica en el fallo.

Contra dicha sentencia, los abogados defensores penales privados dedujeron recurso de nulidad fundado en la causal del artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, en relación a lo preceptuado en el artículo 342 letra c), y en relación a lo señalado en el artículo 297, todos del Código Procesal Penal.

Con fecha trece de marzo del año en curso se declaró admisible el recurso, procediéndose a su vista en la audiencia del día veintiséis de marzo pasado, asistiendo el recurrente, querellante y representante del Ministerio Público, fijándose como fecha para la comunicación de la sentencia el día de hoy.

Oídos los intervinientes y considerando:

Primero: Que la parte recurrente invoca como causal de nulidad la causal de nulidad que contempla el Art. 374 letra e), en relación a los artículos 342 letra c) y 297, todos del Código Procesal Penal.

En primer lugar cita el considerando noveno de la sentencia impugnada se tienen por acreditados los siguientes hechos: *“Que el día 9 de mayo del 2022, en horas de la madrugada, la víctima menor de edad de iniciales M.J.R.T., se encontraba al interior del automóvil Hyundai, Accent, Gris, PPU LKXB.47, junto a otras personas, entre ellas, Luis Jefferson Franco Tello, en intersección de las calles Torres del Paine y Los Lleulles de la villa Lomas de Oriente 3, comuna de Chillán, que desde ese sector, se percutan disparos con ánimo homicida por parte Patricio Soto Bravo hacía el móvil en comento,*



impactando a M.J.R.T. en la cabeza, quien falleció, siendo la causa de su muerte un traumatismo intracraneal por herida con arma de fuego, resultando además Luis Franco Tello herido en su cabeza producto de dichos disparos, no contando Soto Bravo con permiso de porte y/o tenencia de arma de fuego”.

Luego de explicar el principio de la razón suficiente y la cita de jurisprudencia, indica que con la prueba rendida en juicio, establecer la participación de su representado en los hechos como lo indica el voto de mayoría, vulnera flagrantemente el principio lógico de razón suficiente y es a lo menos una conclusión temeraria, ya que de la prueba rendida en juicio, se permitía clara y necesariamente llegar a la conclusión contraria, esto es que Patricio Soto Bravo no tuvo participación alguna en los hechos, tal como lo señala el voto de minoría, que estuvo por absolver al acusado. En efecto, en juicio solo declaró una testigo presencial de los hechos, una menor de nombre Sofía de 17 años de edad, quien dijo tanto en el juicio oral, como durante la investigación, haber visto al autor de los disparos. Pues bien, Sofía al deponer en juicio fue categórica en señalar, que su representado no era la persona que vio el día de los hechos con una pistola en el segundo piso de la casa desde donde provenían los disparos. Lo mismo se indica en el voto de minoría de la sentencia: “Peor aún, cuando la testigo directa Sofía, en sus espontáneas afirmaciones, a quien se le exhibió en 2 oportunidades a través del “paneo” la sala de audiencia con todos los intervinientes presentes, fue enfática en señalar que esa persona –refiriéndose al acusado- no es la que ella habría visto en el segundo piso de la casa”.

Señala que “sobre el punto Sofía indica expresamente lo siguiente al efectuar el reconocimiento en sala del acusado: - “pero no está”, “el que está ahí de rojo, pero no es, porque el otro es como más claro y él es oscuro... él no es, por la cara, el otro es como más claro”, “porque él es como moreno y la persona que yo vi ese día era como más clarito”. A su vez al declarar la propia funcionaria a cargo de la investigación doña Cynthia Mendoza refiere

“para nosotros, la única persona que vio a la persona en la ventana, fue Sofía, fue la única que vio a una persona”.

Expresa el recurrente que de esta forma queda del todo claro que las pruebas rendidas en juicio, necesariamente llevaban a una conclusión distinta a la que arribó el Tribunal recurrido en su voto de mayoría. La única conclusión fundada a la que se podía llegar con la prueba rendida, es que Patricio Soto Bravo, no participó en los hechos por lo cual fue condenado, esa es la única conclusión a la que la prueba rendida en juicio, permitía llegar, por lo que a contrario sensu, establecer la participación de su representado en los hechos, solo en base a indicios y pasando incluso por sobre la prueba presencial rendida en juicio oral, ciertamente constituye una violación flagrante a dicho principio lógico, que como señala manda que no se puede arribar a una conclusión, sin que exista una razón suficiente para arribar a dicha conclusión y no a otra. Los solos dichos de Sofía eran razón suficiente, para que al menos, el Tribunal necesariamente tuviere una duda más que razonable respecto a la participación de su representado en los hechos objeto de acusación.

Añade el letrado que los indicios de los que se vale el Tribunal Oral, en su voto de mayoría, para establecer la participación de su representado, no constituyen razón suficiente para arribar a dicha conclusión, Además de lo ya expuesto, en orden a que la única testigo presencial que depuso en juicio oral fue tajante en señalar que el acusado no era la persona que vio el día y hora de los hechos en el sitio del suceso, con una pistola en la mano, en la ventana del segundo piso desde donde provinieron los disparos. Agrega que los indicios a los que echa mano el Tribunal recurrido en su voto de mayoría, son del todo insuficientes y vagos, para permitir por sí mismos, arribar a la conclusión a que llega el Tribunal Oral, en orden a que su representado es el autor material de los hechos, vulnerando dicha conclusión el principio lógico de razón suficiente.

Argumenta la defensa que el Tribunal oral en su voto de mayoría es claro en su considerando Décimo Tercero en reconocer que la condena de su representado se *funda solo en indicios*, lo que le parece gravísimo, tomando en consideración que la única testigo directa que depuso en juicio oral, señalo que el sentenciado no era la persona que vio el día y hora de los hechos con una pistola en el segundo piso del domicilio de los Lleulles 1474.

A continuación, analiza por qué estos indicios, en sí mismos y obviando incluso la declaración de la testigo directa Sofia, son absolutamente insuficientes, para servir de fundamento a la conclusión que arriba el Tribunal, en orden a la participación de su representado.

Indica que uno de estos indicios es la información de dos testigos bajo reserva de identidad, testigo reservada 1 y 2, ninguna de las cuales fue presentada en juicio oral y respecto de las cuales siquiera se tuvo un testimonio de oídas en el juicio, ya que quien entrega la información de lo que señalan los testigos reservados es la funcionaria de la PDI doña Yamili Cantillana, quien no tomo la declaración, ni participó como testigo de la misma. Por lo tanto, en el juicio oral, en la realidad de las cosas, siquiera se recibió un testimonio de oídas de lo que habrían indicado las referidas testigos reservadas, así consta en la propia sentencia al referirse a la declaración de doña Yamili Cantillana, que señala “no aparece presenciando, ni tomando (sic) señaló que tomó conocimiento porque estuvo en la búsqueda del imputado, que de ahí sale la información quién es el imputado y tenía que leer las declaraciones. Que sí estas declaraciones las tomó la Subcomisario Cinthya Mendoza en compañía del subcomisario Luis Guerrero Araneda. Que no sabe dónde fueron materialmente tomadas”.

Expresa el recurrente que se desvirtúa absolutamente un juicio oral, al valorar el Tribunal dicha información aportada e incorporada al juicio por quien siquiera fue testigo de oídas de los señalado por testigos reservados en la investigación, desnaturalizándose el juicio oral básicamente, a una mera relación de lectura de actas. Así malamente se puede hablar que doña Yamili

es una testigo, si quiera de oídas, de las declaraciones de los testigos reservados.

Agrega la defensa que es importante dejar en claro desde ya que la información aportada por la testigo reservada n° 1 nada puede aportar sobre el hecho mismo, ya que ella misma indica que no estaba ese día en lugar de los hechos, lo que es incontrovertible. Respecto a la testigo bajo reserva de identidad 2, lo cierto es que como se dijo, más allá que su información siquiera fue entregada por un testimonio de oídas, es decir, por la persona que le tomo declaración, esto es la funcionaria de la PDI Cynthia Mendoza en compañía del subprefecto señor Garrido Aravena, la información entregada por doña Yamili Cantillana, sobre los dichos de esta testigo reservada, a la que no les tomó, ni presencié sus declaraciones, son del todo confusos y contradictorios con la demás prueba de cargo.

Luego de citar doctrina, señala el recurrente que para poder otorgar valor a los testimonios de oídas (aunque el referido testimonio de la Sra. Cantillana ni siquiera lo es) es necesario, para poder darles valor probatorio, que los mismos, al menos sean corroborados con otros medios de prueba durante el juicio, lo que no ha sucedido en el presente caso, pues lejos de encontrar corroboración en otros antecedentes, la versión de la testigo reservada 2, ha sido contradicha por la propia prueba de cargo.

Posteriormente cita la declaración de los testigos reservados para concluir que de la sola lectura de lo expuesto en juicio por doña Yamili Cantillana a la defensa en juicio, queda del todo claro lo señalado por la defensa, en primer lugar en orden a que ella no es testigo de oídas de los testigos reservados y en segundo lugar que la versión supuestamente entregada por la testigo reservada B, que no depuso en juicio oral es contradictoria con la entregada por la testigo directo de cargo, la menor Sofia, al decir que leyó que el testigo reservado 2 señaló respecto del acusado “que estaba sobre un medidor en el jardín, lo que sí difiere de lo que señala Sofía con lo que indica la testigo reservada, en cuanto al lugar donde debería estar esta persona”.

Argumenta la defensa que es importante recordar que Sofia indica que ve en la ventana del segundo piso de la casa 1474 a una persona rubia con una pistola, quien no sería el acusado. Sin embargo, el testigo reservado se sitúa el mismo, en la ventana del segundo piso de la casa de los Lleulles 1474 al momento de los disparos si este testigo reservado dijo que escuchó los disparos, dentro de la casa dijo que estaba en la ventana del segundo piso, mismo lugar donde Sofia indica al autor de los disparos. Por lo que claramente esta versión de este testigo reservado 2, que no se incorporó a juicio oral siquiera por un testimonio de oídas, no se encuentra corroborada con ninguna otra prueba de cargo, sino que por el contrario se encuentra desacreditada por los dichos del testigo Sofia, vulnerándose así también el principio de razón suficiente.

Añade que la información entregada por doña Yamili de lo que supuestamente leyó, acerca de lo que dijeron los testigos reservados, es sumamente confusa y poco fiable desde que indica lo siguiente en juicio respecto a la declaración del testigo bajo reserva 2 ya que no señala, ni que los observa, ni que estaba escondida, solamente señala que está segura que la persona que disparó fue el Rucio. “dijo que escuchó los disparos, dentro de la casa, dijo que estaba en la ventana del segundo piso”. Dice que pareciera que se puede concluir de esta información, que solo los escucha, pero no señala haberlos observado, lo que es coincidente con lo que expresa Doña Cynthia Mendoza funcionaria PDI a cargo de la investigación y quien sí toma declaración a este testigo reservado 2 y que si bien al declarar en juicio no se refiere a las declaraciones que tomo a los referidos testigos reservados, sí indica cuando depone una cuestión del sumo relevante “para nosotros, la única persona que vio a la persona en la ventana, fue Sofia”, fue la única que vio a una persona” (página 37 sentencia). Ahora si el testigo reservado 2 no señala haber observado los disparos, se pregunta cómo puede estar seguro quien disparó. Se pregunta cómo la testigo presencial Sofia, indica haber visto al sujeto que disparó, en el mismo lugar donde se posiciona el testigo reservado.



Otro indicio al que apela el voto de mayoría de la sentencia recurrida es a la existencia de una georreferenciación relativa a un número de un teléfono celular, que supuestamente pertenecería al acusado, ya que lo habría dado en una audiencia previa en causa diversa. Sobre este punto dice que es preciso señalar que la funcionaria a cargo de esta investigación doña Cynthia Mendoza fue tajante en señalar que dicha diligencia no permite establecer el punto exacto donde se encontraba el imputado al momento de los hechos, ni menos permite indicar que estaba en el sitio del suceso, sino que solo cercanía con la antena repetidora más cercana al lugar de los hechos. Ahora sobre estos indicios cabe preguntarse si estaba el acusado en posesión del teléfono celular al momento de los hechos, o dónde pernoctaba el imputado al momento de los hechos, o bien, dónde y a que distancia del lugar de los hechos esta la referida antena más cercana, o qué radio abarca esa antena un sector, citando el voto disidente en apoyo de esta tesis.

Agrega que en el mismo orden de cosas y a mayor abundamiento le parece que la georreferenciación referida, es aún menos relevante y carece de toda significación y es absolutamente insuficiente para servir de razón a alguna conclusión, más aún cuando el Ministerio Público por lo demás no acompañó absolutamente ninguna prueba en juicio, que vinculara al acusado, con el domicilio desde donde provenían los disparos, esto según el fallo de mayoría, la de los Lleulles 1474, apoyándose en el voto de minoría que indica que los acusadores no han probado de modo alguno cual es la vinculación del acusado Patricio Soto Bravo con alguna de esas casas, qué hacía en alguno de esos inmuebles, sobre todo cuando el enjuiciado registra un domicilio particular completamente distinto en el SIAGJ.

El recurrente expresa que otro indicio al que apela el voto de mayoría es a la existencia de un supuesto móvil de su representado para ejecutar el delito, el que estaría dado por rencillas anteriores entre su representado y los ocupantes masculinos del vehículo que recibió los disparos, esto es, Franco, un menor llamado Maicol y un tercer sujeto apodado Chimano. Dice que lo cierto es que sobre el punto no se rindió ninguna prueba que acreditara

efectivamente la existencia de algún conflicto previo de su representado con alguno de esos sujetos, solo rumores de oídas. Basta partir por señalar que ninguna de estas 3 personas concurrió a declarar al juicio oral y el Ministerio Público tampoco hizo nada por presentarlos en juicio. No se especifica de qué tipo y no se sabe cuál el supuesto conflicto previo existente, cuando ocurrieron esos hechos, no se acompañaron denuncias previas, no se sabe con quién era este conflicto, si con los 3 ocupantes del vehículo o solo con uno, si existía en realidad ese conflicto previo, o se conocía el acusado con estos tres sujetos. De esta manera le parece que es al menos temerario, por parte del voto de mayoría arribar a una conclusión que su representado es autor de los hechos, por un supuesto móvil no especificado y no acreditado en lo absoluto, teniendo en cuenta de partida, que en juicio oral no declaro ningún testigo directo que advirtiera y se refiriere esa rencilla previa, la que se basa solo en rumores, sin que exista ninguna información directa que lo relate, ni menos se encuentra corroborado con las pruebas rendidas en juicio.

Añade el recurrente que El tribunal en su voto de mayoría en su considerando Decimotercero vulnera el principio lógico de razón suficiente al arribar a la conclusión que “el inculpatado tenía un motivo para atacar al tal Chimano o Maicol” ya que, de ello no se cuenta con ningún antecedente serio, directo y específico que le sirviera de razón suficiente para llegar a esa conclusión apoyándose en este punto en el voto de minoría que señala que no ha quedado probado de ningún modo la existencia de este móvil o de alguna otra motivación previa al ataque homicida, por la sencilla razón que ninguno de estos 3 sujetos compareció a juicio a contar su versión de los hechos, y se desconoce cualquier tipo de información directa sobre el asunto.

Finalmente, la defensa expresa que la sentencia recurrida, en su voto de mayoría, como ultimo indicio, se basa para condenar a su representado, en dos interceptaciones telefónicas consignadas como n°215 y n°216, realizadas a la supuesta pareja del acusado, quien se comunica con una persona desconocida, días posteriores a los hechos. Sobre dichas interceptaciones telefónicas se puede decir que se trata de una evidencia absolutamente



desligada de su representado, ya que el no participa en ninguna de dichas conversaciones, ni jamás es nombrado en ellas ni por su nombre, ni por su supuesto apodo de rucio, no se escucha con claridad su voz, además no se sabe siquiera quién es la persona con la que conversa la supuesta pareja de su representado, apoyándose nuevamente en el voto disidente que acoge esta tesis.

Por último, el recurrente agrega que aquellas interceptaciones telefónicas tampoco pueden servir de razón suficiente para arribar a la conclusión, que su representado participa en los hechos desde que él no es referido en ninguna de ellas, tal como lo señalo al deponer la funcionaria policial Yamili Cantillana, quien afirma que en las referidas interceptaciones telefónicas “en ningún momento se nombra a Patricio Soto Bravo por su individualización, con su nombre, que en ningún momento se habla en esa conversación de algún problema que haya acaecido en el pasaje de los Lleulles, si se refiere a un problema que haya existido en una barbería. Nunca se pudo determinar con qué persona era la que hablaba la supuesta pareja del acusado”.

En consecuencia, solicita se acoja el recurso, anulando tanto la sentencia impugnada como el juicio oral, a fin de que se lleve a efecto un nuevo juicio oral, por el Tribunal no inhabilitado que corresponda.

Segundo: Que, el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal establece: "Motivos absolutos de nulidad. El juicio y la sentencia serán siempre anulados: e) cuando, en la sentencia se hubiere omitido alguno de los requisitos previstos en el artículo 342 letras c), d) o e). Por su parte, el artículo 342 del mismo Código en su letra c) señala que: "Contenido de la sentencia. La sentencia definitiva contendrá: c) La exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieren por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297".

Tercero: Que, a su turno, el artículo 297 del citado Código Procesal Penal dispone en primer lugar, la facultad que tienen los tribunales de apreciar la prueba con libertad, lo que permite hacer una valoración de los antecedentes de juicio con mayor latitud, puesto que el legislador no ha consignado en cada caso límites en dicha ponderación, la única exigencia que se establece para tal raciocinio será la de no contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados.

Además, dicha disposición impone el deber del juzgador de hacerse cargo de toda la prueba producida en el juicio y, por último, también se impone que, en la valoración de la prueba en la sentencia, se deba especificar el o los medios de prueba mediante los cuales se dieron por acreditados cada uno de los hechos y circunstancias, lo que permitirá la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones. Esta exigencia se ha concretado en la letra c) del artículo 342 del Código Procesal Penal, cuando se especifica como uno de los requisitos de la sentencia el que ésta contenga la exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297.

Cuarto: Que, la sentencia recurrida, luego de reproducir la prueba tanto del Ministerio Público en su considerando Sexto y en el Séptimo la adhesión a la misma tanto por la parte querellante como por la defensa, en el considerando Octavo procede a analizar la prueba rendida de manera detallada, fundamentada y razonada para acreditar cada uno de los ilícitos materia de la acusación, y reproducir las argumentaciones y alegaciones tanto del Ministerio Público, como querellante y defensa, para arribar al establecimiento de los hechos y de los ilícitos en el considerando Noveno.

A su vez, en considerando Décimo desarrolla la importancia del estándar de prueba y el considerando Décimo Primero explica de nuevo de

manera fundamentada y detallada por qué la prueba de los acusadores deviene en suficiente y certera para acreditar los elementos de los tipos penales de los dos homicidios en grado de consumado y frustrado, y de un porte ilegal de arma de fuego permitiendo vincular como autor responsable al enjuiciado Soto Bravo, conforme lo exige el artículo 297 del Código Procesal Penal, analizando en forma detallada y pormenorizada la prueba de cada uno de los delitos que dio por acreditados. Adicionalmente, el considerando Décimo Segundo da por configurado los delitos objeto de la acusación y el considerando Décimo Tercero desarrolla de manera acuciosa la figura de los indicios en los delitos de homicidio, destacando una serie de principios fijados por la doctrina, así como por la jurisprudencia, para entender concurrente la prueba indiciaria como suficiente, citando los indicios que indica en el fallo, para posteriormente analizar el delito del porte de arma de fuego.

De acuerdo a lo anterior, el fallo de manera fundada, suficiente y detallada desarrolla y analiza toda la prueba rendida, haciéndose cargo de cada una de las argumentaciones de la defensa. Es por ello que, como se reitera más adelante, lo que hace en realidad la defensa es cuestionar la valoración que hicieron los jueces de la prueba rendida intentando por esta vía que se efectúe una nueva valoración que corresponda a la suya, lo que excede el presente recurso de nulidad. En suma, no se trata aquí de que la sentencia haya infringido normas de sana crítica o contenga vicios en su razonamiento o falta de razón suficiente, sino que se trata de una discrepancia o desacuerdo que tiene el recurrente en la forma en cómo apreció los hechos el tribunal.

Quinto: Que, de lo expuesto precedentemente, es claro que los sentenciadores al momento de arribar a la convicción acerca de la culpabilidad del imputado, expusieron de manera clara, lógica y completa cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados, y efectuaron de forma razonada la valoración de los medios de prueba que fundamentaron dichas conclusiones no contradiciendo los principios de la

lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados.

En efecto, los sentenciadores valoraron la prueba de forma lógica, razonada, argumentando fundada y justificadamente, explicando por qué llegaron a la convicción de culpabilidad y participación del autor en los ilícitos en que se les acusó, y señalando por qué la prueba rendida por el Ministerio Público generó la convicción que los llevó a dictar la sentencia condenatoria y por qué fueron desechadas las alegaciones y prueba rendida por la defensa, a diferencia de lo argumentado por la recurrente, quien señala que no hubo tal fundamentación, cuestión que no es efectiva porque los sentenciadores sí fundamentaron y dieron cuenta de sus conclusiones, más allá que el recurrente no las comparta, lo que constituye precisamente el fundamento de su recurso y no la mentada infracción a las normas de la sana crítica o falta de razón suficiente que se reclama.

Sexto: Que, como se dijo, las alegaciones del recurrente dicen relación más bien con un desacuerdo acerca de la forma en cómo valoraron los jueces la prueba rendida y los hechos acreditados que a una ausencia de fundamentación en la sentencia.

En este punto, la tesis fundamental de la defensa o su teoría del caso planteó que su representando sólo fue condenado por prueba indiciaria del todo insuficiente y vaga, para permitir por sí misma arribar a la conclusión a que llega el Tribunal Oral, en orden a que el acusado es el autor material de los hechos, vulnerando dicha conclusión el principio lógico de razón suficiente, pasando incluso por sobre la prueba presencial rendida en juicio oral.

Sin embargo, lo anterior no es efectivo, debido a que el tribunal explica fundadamente por qué los indicios que justifican la condena al acusado son suficientes, concretos y específicos, desarrollando de manera clara y detallada cada uno de ellos.

En este punto el tribunal a quo, explica por qué la declaración de Sofía genera convicción para la identificación del acusado, ya que es la persona que

declaró reconociéndolo; y si bien la defensa dice advertir algunas contradicciones o imprecisiones, lo cierto es que, por la dinámica de los hechos, en que todo fue muy fugaz y en condiciones muy estresantes (de madrugada, oscuro, con ráfaga de balas y sangrando la víctima) era esperable que no existiera una precisión de la testigo en orden a recordar o detallar con exactitud el lugar de donde venían los disparos y, por otra parte, también es comprensible la dificultad de identificación más de un año después de los hechos, aun cuando ya había efectuado un reconocimiento certero con anterioridad, siendo fundamental la impresión que frente al tribunal ha generado la declaración del testigo que aparece como verídica, declarando una participación que además es consistente y coherente con toda la otra prueba rendida en el proceso, teniendo presente además que Sofía no es la única testigo presencial, sino que también Ashley quien refiere haber oído de la participación acusado en los hechos, teniendo en cuenta que las dos estaban dentro del vehículo.

Asimismo, los indicios referidos al móvil (rencillas “con el rucio”) también están explicados y desarrollados por el tribunal a quo, y si bien la defensa argumenta que tal móvil no es convincente, en realidad aquello no es más que una valoración distinta que ofrece el recurrente respecto a la decisión del tribunal, pero no una falta de lógica o de fundamentación de la sentencia, teniendo en consideración que tres funcionarios dan cuenta que el acusado tenía conflictos con la persona que se bajó del vehículo, sin perjuicio de la otra prueba relacionada, lo que también generó convicción en el tribunal.

Por otra parte, con respecto al indicio de la geo – referenciación, si bien la crítica hace referencia a que no determina el lugar exacto en que se encontraba el acusado, tal técnica permite, sin embargo, establecer que el encartado se encontraba en las cercanías del lugar de los hechos y luego se detecta su salida a la ciudad de Talca, lo que permite presumir una conducta propia de huida del acusado, todo ello teniendo en consideración que se logró obtener georreferenciación del teléfono del imputado y también de su pareja, destacando que el día en que ocurren los hechos -el 9 de mayo del 2022- el



teléfono del imputado marcaba una antena cercana al sitio de suceso desde el día 8 a las 21 horas hasta las 4 de la mañana del día 9, todo ello en una antena del sector Lomas de Oriente, y posteriormente el 10 de mayo, identifica al acusado que estaba en Talca iniciándose una persecución, que permitió que ese mismo día quedara detenido el imputado.

Finalmente, la interceptación telefónica constituyó también un indicio de importancia que permitió establecer la participación del acusado ya que, si bien la defensa critica la vaguedad de tal interceptación, lo cierto es que utilizando las máximas de experiencia y la lógica, es posible advertir las expresiones que implica la participación criminal del acusado, al señalarse en tal interceptación del teléfono de su pareja, las expresiones “cómo no se va a embalar si lo fueron a balear a una barbería donde él estaba con su hija”, o “él estaba con mi hija, si yo te mostrara el video, y él la defendió nomás”, y la expresión, “que iba a saber que iba la mocosita ahí adentro” refiriéndose al hecho.

En suma, más allá de las críticas legítimas que pueda efectuar la defensa ya sea tanto a las declaraciones de los testigos como de los indicios utilizados por el tribunal, lo cierto es que los sentenciadores justificaron y explicaron, no obstante las observaciones de la defensa, por qué la prueba indiciaria sí produjo convicción más allá de toda duda razonable para determinar la participación del encartado en los hechos atendida la una pluralidad de indicios, demostrados mediante prueba directa, con un enlace preciso, concreto y directo, con el razonamiento de cómo ha llegado a la certeza del hecho presunto, y debidamente motivado, según las exigencias que el mismo tribunal estableció en el considerando Décimo Tercero de la sentencia.

Séptimo: Que, como puede apreciarse, los sentenciadores razonan y fundamentan sus conclusiones de forma completa y suficiente, de tal manera que cuestionar las apreciaciones del tribunal como pretende el recurrente no es más que un cuestionamiento acerca de la valoración de la prueba que realizan los jueces, cuestión totalmente extraña y ajena a un recurso de



nulidad que no tiene por objeto una nueva valoración de los hechos y probanzas rendidas.

En consecuencia, basándose el recurso de nulidad fundamentalmente en alegaciones que no dicen relación con una falta de fundamentación de la sentencia sino con discrepancias acerca de la valoración que los sentenciadores hicieron de la prueba rendida y de los hechos que dieron por acreditados, es posible concluir que dicho recurso no podrá prosperar.

Octavo: Que, cabe tener presente, que los artículos 296 y 340 inciso 2º del Código Procesal Penal determinan respectivamente: "La prueba que hubiera de servir de base a la sentencia deberá rendirse durante la audiencia del juicio oral..." y "El Tribunal formará su convicción sobre la base de la prueba producida durante el juicio oral". Como consecuencia de lo anterior, el Tribunal está facultado para hacer la apreciación conjunta de la prueba y conceder credibilidad a unas u otras declaraciones en todo o en parte, pudiendo tomar datos de todas las manifestaciones prestadas según su personal criterio y valoración, conforme al principio de la libre valoración establecido en el artículo 297 del cuerpo legal antes citado.

Noveno: Que, el control que esta Corte puede hacer sobre la prueba sólo cabe si la valoración efectuada por el Tribunal Oral ha sido notoriamente irracional o arbitraria, en lo que no se ha incurrido. Por el contrario, del análisis de los antecedentes se desprende que junto con respetar la regularidad formal del procedimiento se hizo una apreciación racional de la prueba para llegar a las conclusiones consignadas en el fallo.

En consecuencia, lo que puede concluirse en relación al recurso de nulidad interpuesto por la defensa, es que dicho recurso no ataca en realidad una infracción a principios de la lógica, las máximas de la experiencia o conocimientos científicamente afianzados, sino que es una reclamo a la valoración que los sentenciadores hicieron de la prueba rendida en el juicio, en el cual la defensa plantea una valoración que es distinta y que a su juicio sería la correcta y no la que a su vez estima equivocada del tribunal , lo que

no es propio de un recurso de nulidad sino que de una apelación, lo que ciertamente no es procedente en sede procesal penal.

Décimo: Que, como ya se ha señalado precedentemente, el recurso de nulidad no constituye una instancia, de manera que estos sentenciadores no pueden ni deben revisar los hechos que conforman el conflicto jurídico de que se trata, y, del mismo modo, están impedidos de efectuar una valoración de la prueba rendida ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, como ya se ha reiterado, ya que éste está dotado de plena libertad, con la sola limitación de no contrariar los principios de la lógica, las máximas de la experiencia, y los principios científicamente afianzados, lo que en el caso en estudio, no ha ocurrido.

Que, por lo señalado en los motivos precedentes, se desestimaré el recurso de nulidad deducido por la defensa del sentenciado

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 383 y 384 del Código Procesal Penal, **se rechaza, sin costas** el recurso de nulidad deducido por los abogados defensores privados José Ignacio Mora Olivera y Bruno Flores Fernández, en representación de Patricio Sebastián Soto Bravo, en contra de la sentencia dictada el catorce de febrero del año en curso del año en curso, por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Chillán en los autos **RUC 2200445825-0, RIT 286-2023**, declarándose que ella no es nula, como tampoco lo es el juicio oral.

Regístrese y comuníquese lo resuelto.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Señor Fabián Huepe Artigas, quien no firma por no haber integrado sala el día de hoy.

No firma la Ministra Paulina Gallardo García, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse haciendo uso de feriado legal.

Rol Corte N°139-2024 Penal.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YFSTXMKGRQX

Proveído por el Señor Presidente de la Segunda Sala de la C.A. de Chillan.

En Chillan, a doce de abril de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YFSTXMKGRQX